

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO

Manizales, diez (10) de julio de dos mil veinte (2020)

SENTENCIA 2da INST.	70
PROCESO:	ACCIÓN DE TUTELA
ORIGEN:	JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES
ACCIONANTE:	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
ACCIONADA:	CORPORACION DEBATE & LIDERA
RADICACIÓN:	17-001-43-03-003-2020-00167-02

OBJETO DE DECISIÓN

Procede el Juzgado dentro del término legal a decidir la impugnación presentada por la entidad accionante frente al fallo proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Manizales, el 2 de junio de 2020, en la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES:

Hechos:

Manifestó el ente territorial que presentó derecho de petición el día 10 de marzo de 2020 ante la Corporación Debate & Lidera, solicitando información acerca de la certificación laboral expedida a favor del señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARIA, a fin de corroborar que el mismo cumple con los requisitos para desempeñar el empleo denominado Profesional Universitario Código 219, Grado 2, previo concurso de méritos, sin embargo a la fecha no ha recibido respuesta de la entidad accionada.

Pretensiones

Pretende la vocera judicial de la entidad accionante que le sea tutelado el derecho fundamental de petición y el debido proceso ordenando a la

Corporación Debate & Lidera otorgue respuesta de fondo y de forma clara a la petición elevada desde el día 10 de marzo de 2020 en lo que tiene que ver con la información soportada en las certificaciones laborales emitidas a favor del señor NEIRA SANTAMARIA. Igualmente solicita como pretensión subsidiaria se oficie a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones y eventuales sanciones en caso de continuar con la negligencia.

Trámite de primera instancia

Mediante auto proferido el 21 de mayo del año en curso la Juez de instancia dispuso la admisión de la acción de tutela y le concedió a la entidad accionada el respectivo término para que hiciera uso del derecho de contradicción y defensa.

Respuesta de la accionada.

CORPORACION DEBATE & LIDERA. Advirtió el representante legal (Juan Carlos Neira Santamaría) que las averiguaciones del ente territorial frente a la certificación laboral expedida obedecen a un conflicto de intereses adelantado por el segundo de la lista de elegibles, quien a su vez se encuentra en encargo en el empleo objeto de concurso de méritos, mismo que ya aceptó ser un falso denunciante anónimo, pues lo realizó directamente, aparentando ser anónimo para no ser descubierto, pero como quiera que muchas pruebas fueron aportadas en su contra, terminó aceptando su responsabilidad.

Igualmente manifestó que la Corporación esta ad portas de iniciar proceso de liquidación, sin movimiento de producción por servicio alguno desde hace año y medio aproximadamente, motivo por el que no cuenta con la solvencia para atender requerimientos como los adelantados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, no por desconocer derechos, sino porque incluso en tal dirección prácticamente no se encuentra nadie, sin domicilio nuevo de la organización, por las mismas razones deficitarias que hacen imposible una carga económica, y más en estos momentos de crisis e impedimentos de la economía.

Finalmente informó que el contenido del derecho de petición fue resuelto, al correo electrónico director@saluddecaldas.gov.co, motivo por el cual considera que no existe la vulneración deprecada, y al contrario de ello, es un hecho superado. Para ello aportó las respectivas pruebas.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La juez de primera instancia luego de hacer un recuento procesal del trámite constitucional y hacer un estudio del derecho instado de protección, concluyó que en la guarda constitucional se configuró la carencia de objeto por hecho superado, al considerar que Corporación dio respuesta a la petición elevada el día 10 de marzo de 2020 por la entidad accionada.

IMPUGNACIÓN

Dentro del término de ley, la entidad territorial impetró recurso de opugnación contra el fallo de primera instancia, al considerar que no es cierto que se resolviera el derecho de petición de fondo y de forma clara, toda vez que en la petición se están solicitando soportes probatorios que respalden las labores que ejerció la persona que responde el derecho de petición, esto al tenor del artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, ya que los mismos no son objeto de autorización por parte del titular según lo establecido en la Ley estatutaria 1581 de 2012, por lo que no encuentra razón para que el mismo no entregue o informe a la entidad pública que se pretende vincular tal información.

Por lo anteriormente expuesto solicitó se revoque el fallo impugnado y se ordene a la entidad encartada a responder de manera clara, precisa y congruente la petición elevada en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo.

CONSIDERACIONES

Competencia

Este despacho tiene la competencia en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, para conocer de la impugnación formulada contra el fallo de tutela proferido el 2 de junio de 2020, por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Manizales, Caldas.

PROBLEMA JURÍDICO:

Analizado el fallo de primera instancia, el escrito de impugnación y las pruebas allegadas al proceso tuitivo, el problema jurídico a resolver en el presente caso se dirige a determinar si la decisión proferida por el fallador constitucional se encuentra ajustada a derecho en tanto la respuesta brindada es congruente con lo solicitado, o si le asiste razón a la accionada cuando afirma que se trata de una respuesta evasiva.

En aras de zanjar esta discusión, encuentra el despacho necesario estudiar el derecho de petición ante particulares y la reserva legal de documentos provenientes de una entidad privada, para luego identificar si la decisión recurrida se confirma, modifica o revoca.

En primer lugar se traerá a colación extracto jurisprudencial contenido en la sentencia T-077 de 2018, donde de manera amplia se analiza el Derecho fundamental de petición con especial trascendencia, en torno a la petición elevada ante particulares, veamos:

“Derecho fundamental de petición. Reiteración de jurisprudencia

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En desarrollo del Texto Superior, la Ley 1755 de 2015^[2] reguló todo lo concerniente al derecho fundamental de petición, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo^[3].

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al derecho de petición, precisando que el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos

planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas^[4].

En reciente Sentencia C-418 de 2017, este Tribunal reiteró que el ejercicio del derecho de petición se rige por las siguientes reglas y elementos de aplicación^[5]:

- “1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
- 2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.
- 3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.
- 4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.
- 5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.
- 6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiese darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.
- 7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.
- 8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder.
- 9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”.

Y más adelante, en la citada jurisprudencia se establecen los requisitos para que resulte procedente el derecho de petición frente a particulares, siempre y cuando concorra alguno de los siguientes eventos:

“(i) La prestación de un servicio público o el desempeño funciones públicas. Al respecto, se destacan las entidades financieras, bancarias o cooperativas, en tanto que se trata de personas jurídicas que desempeñan actividades que son consideradas servicio público^[6]. De la misma manera, se incluyen las universidades de carácter privado, las cuales prestan el servicio público de educación^[7]. También se destacan las actividades de los curadores urbanos, quienes son particulares encargados de la verificación del cumplimiento de la normatividad urbanística o de edificación^[8]. En estos eventos, el derecho de petición opera como si se tratase de una autoridad y, por consiguiente, al ser similar la situación y la calidad del particular a una autoridad pública, está en la obligación de brindar respuesta a las peticiones presentadas, siguiendo lo estipulado en el artículo 23 de la Constitución Política^[9].

(ii) El ejercicio del derecho de petición como medio para proteger un derecho fundamental.

(iii) En aquellos asuntos en los cuales exista una relación especial de poder entre el peticionario y la organización privada. Al respecto, la Ley 1755 de 2015 dispuso que el citado derecho se podía ejercer ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encontrara en: (i) situaciones de indefensión o subordinación o, (ii) la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario^[10].

Y respecto a la reserva en tratándose de documentos privados la Corte en sentencia T-487 de 2017, expuso:

“6. El derecho de acceso a informaciones y documentos privados. La reserva de información

“La regla general señala el derecho de acceso a los documentos públicos, salvo los casos de reserva expresamente contenidos en la ley. **Sin embargo las reglas establecidas para el acceso a la información y los documentos públicos no son aplicables en el caso de los documentos e informaciones privadas, pues como lo ha señalado la Corte, las relaciones entre particulares se desarrollan bajo el postulado de la libertad y la autonomía de la voluntad privada y, por tanto, no deben existir desequilibrios ni cargas adicionales para las personas.**

“La Corte ha estudiado el tema de la reserva de documentos e informaciones de particulares, y para el efecto ha dispuesto una tipología de las clases de información, que permite demarcar los ámbitos de reserva, de acuerdo con los contenidos de esa información. Considera la Corporación que esa tipología es útil por dos razones: “la primera, porque contribuye a la delimitación entre la información que se puede publicar en desarrollo del derecho constitucional a la información, y aquella que constitucionalmente está prohibido publicar como consecuencia de los derechos a la intimidad y al habeas data. La segunda, porque contribuye a la delimitación e identificación tanto de las personas como de las autoridades que se encuentran legitimadas para acceder o divulgar dicha información”^[30].

Dentro de esta perspectiva ha dicho la Corte de manera reiterada, que desde el punto de vista cualitativo y en función de su publicidad y de la posibilidad legal de obtener acceso a la misma, la información corresponde a cuatro grandes tipos^[31]: la información pública o de dominio público, la información semi-privada, la información privada y la información reservada o secreta.

“La *información pública*, calificada como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución, puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea información general, privada o personal. Por vía de ejemplo, pueden contarse los actos normativos de carácter general, los documentos públicos en los términos del artículo 74 de la Constitución, y las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas; igualmente serán públicos, los datos sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de la familia. Información que puede solicitarse por cualquier persona de manera directa y sin el deber de satisfacer requisito alguno.

“En segundo término se encuentra la *información semi-privada*, siendo aquella que por versar sobre información personal o impersonal y no estar comprendida por la regla general anterior, presenta para su acceso y conocimiento un grado mínimo de limitación, de tal forma que la misma sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa en el

cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la administración de datos personales. Es el caso de los datos relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social o de los datos relativos al comportamiento financiero de las personas.

“Luego se tiene la *información privada*, aquella que por versar sobre información personal o no, y que por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes, de los documentos privados, de las historias clínicas o de la información extraída a partir de la inspección del domicilio.

“Finalmente se encuentra la *información reservada*, que por versar igualmente sobre información personal y sobre todo por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular - dignidad, intimidad y libertad- se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados “*datos sensibles*”^[32] o relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona, etc”.

CASO CONCRETO

En el escrito inicial la entidad accionante denunció como hecho vulnerador que la CORPORACION DEBATE & LIDERA no haya otorgado respuesta de fondo, clara y congruente en la petición radicada el 10 de marzo del año en curso, por medio de los cuales buscaba la respuesta y entrega de documentos tales como:

1. “Acreditar si la corporación accionada expidió constancias laborales acreditando que el señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARIA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1110527674 laboró para esta empresa, en caso afirmativo enviar los soportes suficientes que demuestren las labores realizadas durante el tiempo certificado determinando las labores realizadas y anexando copia de las certificaciones emitidas por ustedes.
2. Aportar certificado de existencia y representación legal de la Corporación Debate & Lidera, donde se acredite su objeto social o actividades autorizadas por entidad competente para realizar o ejecutar, donde se evidencie su número de identificación tributaria con fecha de expedición no superior a treinta días.
3. Acreditar los contratos con entidades estatales, conforme a la Ley 80 de 1993 que la Corporación ejecutó durante la vigencia de 2018. En su defecto los actos administrativos que acreditan el vínculo jurídico

que soportó el cumplimiento de las funciones que certificó al señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARIA y relacionadas con entidades públicas como el Consejo Municipal de Ibagué y la Asamblea Departamental del Tolima.

- 4. Acreditar los pagos a la seguridad social realizados durante la vigencia del 2018 a favor del señor NEIRA SANTAMARIA y relacionados con el vínculo laboral sostenido con la Corporación Debate & Lidera”.*

Por ello una vez constatada la respuesta brindada y la petición elevada se encontró, que la entidad accionada solo respondió de fondo a dos interrogantes que son el tercero y cuarto, pues fue enfática la entidad en manifestar que no ha celebrado contratos con el Estado, y frente a la acreditación de pagos a la seguridad social como muy bien lo informó la Corporación al indicar que estas son obligaciones propias entre el empleador y trabajador, además porque tales documentos corresponden a información semiprivada.

Sin embargo, frente a las solicitudes enumeradas como primera y segunda se observa que la Corporación fue extensa pero evasiva en su respuesta, y de ninguna manera se argumentó porque no se remitían los anexos requeridos, pese a que se trata de piezas como el certificado de existencia de representación legal de la Corporación que se negó a aportarlo, al indicar que la entidad accionante ya cuenta con uno, no siendo de recibo tal justificación, aunado a que se trata de documento público que debió aportarlo y respecto a las constancias laborales expedidas no aportó los soportes solicitados, pues solo se limitó a informar que el aspirante si laboró en la entidad cuestionada.

Por ello, para esta Funcionaria judicial, persiste la vulneración de la garantía fundamental toda vez que la accionada no expidió una respuesta de fondo o contestación material, y en este caso pese a tratarse de entidad privada, la información deprecada no está sujeta a reserva al tenor del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, lo que implica que debe revocarse la sentencia confutada. Y es que no puede considerarse que se encuentra superado el hecho que motivó la acción, cuando aún subsisten algunos puntos de la solicitud sin resolver como se planteó con anterioridad. En ese orden se

dispondrá que la Corporación Debate & Lidera, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a resolver de fondo, de manera completa la petición elevada por la entidad accionante el 10 de marzo de 2020, en los respecta a los numerales 1 y 2 contenidos en la solicitud.

Sin otras consideraciones, el **JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES, CALDAS**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Constitución y la Ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida el 2 de junio de 2020 por el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES, dentro de la acción de tutela instaurada por la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS en contra de la CORPORACION DEBATE & LIDERA, y en su lugar se dispone:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, en el trámite de la acción de tutela que interpuso en contra de la CORPORACIÓN DEBATE & LIDERA.

SEGUNDO: ORDENAR a la Corporación Debate & Lidera, que el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a resolver de fondo, y de manera completa la petición elevada por la entidad accionante el 10 de marzo de 2020, en lo que respecta a los numerales 1 y 2.

TERCERO: NOTIFICAR de inmediato y por el medio más expedito esta decisión a las partes y al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES.

CUARTO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JULIANA SALAZAR LONDOÑO
Jueza